

AMICUS CURIAE

12.04.2023

EXPEDIENTES: SUP-JDC-1471-2022 Y ACUMULADOS.

SE PRESENTA ESCRITO AMICUS CURIAE DENTRO DE LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-1471-2022 Y ACUMULADOS.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2023.

Promoventes: Las y los ciudadanos que se indican en la lista de firmantes (ANEXO 1).

Autoridad Impugnada. Consejo General del Instituto Nacional Electoral y Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Acto impugnado: Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las Modificaciones a los Documentos Básicos del Partido Político Nacional denominado MORENA, en cumplimiento al artículo transitorio segundo de los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG517/2020 Así como en el ejercicio de su libertad de autoorganización.

**MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS INTEGRANTES DE
LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

P R E S E N T E S:

Los firmantes que se encuentran anexos al presente (**Anexo 1**), en nuestra calidad de ciudadanos mexicanos militantes y/o simpatizantes del Partido Político Morena, ajenos a los juicios citados al rubro, personalidad que acreditamos con credenciales para votar vigentes adjuntas al presente (**Anexo 2**), señalando como medio para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el presente, el correo electrónico *****, ante Ustedes con el debido respeto comparecemos para exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 41, párrafo segundo, base VI y 99 párrafo cuarto, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la jurisprudencia 8/2018 de rubro: **“AMICUS CURIAE. ES ADMISIBLE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL**, venimos a

AMICUS CURIAE

12.04.2023

EXPEDIENTES: SUP-JDC-1471-2022 Y ACUMULADOS.

presentar un escrito de **AMICUS CURIAE** relacionado con los juicios para la protección de los derechos político-electorales señalados al rubro, sobre el análisis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las Modificaciones a los Documentos Básicos del Partido Político Nacional denominado MORENA, en cumplimiento al artículo transitorio segundo de los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG517/2020. Así como en el ejercicio de su libertad de autoorganización”, en específico derivado del artículo Tercero Transitorio del Estatuto del partido político MORENA, cuya aprobación implicó la ampliación del mandato de Mario Martín Delgado Carrillo, como Presidente; y Minerva Citlalli Hernández Mora, como Secretaria General, ambos del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, en los términos que a continuación se indican:

OPORTUNIDAD

El *Amicus Curiae* (amigo de la Corte) es una figura reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos, en las cortes nacionales, y también en la doctrina, como el documento presentado por personas ajenas al juicio que contiene razonamientos relacionados con los hechos en litigio, aportando así mayores elementos para el análisis del caso.

En el ámbito regional americano, esta figura ha sido reconocida en el artículo 2, párrafo 3, del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se dice que la expresión *Amicus Curiae* significa “la persona o institución ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia”.

Por lo que respecta al reconocimiento de esta figura en nuestro país, su reconocimiento se ha ido ampliando. Así lo encontramos, por ejemplo, en el Acuerdo General número 10/2007, de tres de mayo de dos mil siete del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se establecen los lineamientos para la comparecencia de especialistas ante el Tribunal Pleno.

En el Libro Blanco sobre la Reforma Judicial publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se estableció que los tribunales que escuchan las opiniones contenidas en los *amicus curiae* pueden verse favorecidos al tener puntos de vista adicionales sobre cuestiones en litigio, además de que dicha figura es

especialmente útil cuando los temas que se litigan pueden tener importantes consecuencias jurídicas, como lo es el caso en concreto.

Asimismo, en materia electoral, en las jurisprudencias 17/2014 y 8/2018 emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se reconoce esta figura y su procedencia en los asuntos relacionados en materia electoral, en específico como el que se ventila en los expedientes citados al rubro.

Por tanto, el documento que se presenta hoy, tiene el objeto de hacer escuchar a las voces de las bases y militantes del partido político Morena, que si bien son ajenas en cuanto a personalidad jurídica dentro de los presentes juicios, no lo son en cuanto a sus efectos, es entonces que se busca contribuir a la postura sobre la defensa de sus derechos político-electorales frente a la reelección de Mario Delgado y Citlalli Hernández, al frente de los órganos de dirección de Morena, por lo que se presentan los siguientes apartados:

HECHOS.

I. Celebración del III Congreso Nacional Ordinario de Morena. Los días diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil veintidós, se celebró el III Congreso Nacional Ordinario de Morena, en el cual se aprobaron, entre otros, las modificaciones a sus Documentos Básicos, materia de la presente Resolución.

II. Con fecha jueves 14 de diciembre de 2022, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la Procedencia Constitucional y Legal de las Modificaciones a los Documentos Básicos del Partido Político Nacional denominado MORENA, en cumplimiento al artículo transitorio segundo de los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG517/2020 Así como en el ejercicio de su libertad de autoorganización, en los siguientes términos:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatuto de Morena, conforme al texto final presentado, aprobadas durante el III Congreso Nacional Ordinario de Morena celebrado el diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil veintidós.

III. Inconforme con lo anterior, diecisiete militantes del partido político Morena controvirtieron ante el TEPJF la resolución del Consejo General del INE, así como las graves violaciones que se suscitaron dentro del III Congreso Nacional Ordinario de Morena.

CONTEXTO DEL CASO

Con fecha 4 de abril de 2023, a petición de la magistrada ponente Janine M. Otálora Malassis, se realizó la publicación del proyecto de resolución dentro del expediente SUP-JDC-1471/2022 y acumulados, relativo a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del partido político Morena. En dicha propuesta de resolución, la magistrada ponente, si bien disiente de la mayoría de los agravios hechos valer por las partes, determina con amplitud de razones en esencia lo siguiente:

Del análisis concreto de la norma impugnada a la luz de los principios constitucionales y que rigen el sistema democrático electoral, se considera que el artículo impugnado resulta **contrario a la Constitución federal**.

Lo anterior, en tanto que **la prórroga de dos cargos concretos como son de las personas que actualmente ocupan la presidencia y la secretaría general del CEN realizada por el partido vulnera la renovación periódica de los cargos del órgano partidista, así como de los derechos políticos-electorales de la militancia.**

...

Asimismo, **la prórroga en el cargo, si bien formalmente no constituye una reelección al no haber sido electo por un método democrático, como lo ha sostenido la SCJN, materialmente sí lo es, con lo cual es una manera en la que se vulnera la norma estatutaria que prohíbe dicha reelección de cargos ejecutivos.**

En ese sentido, no obstante que haya sido aprobado por el Congreso Nacional, como máximo órgano del partido, y que el tema de la elección de dirigencias sea un asunto interno del partido del cual goza de autodeterminación, **ello no resulta suficiente para que aprueben una norma que contravenga los principios constitucionales electorales y el sistema democrático, al que los partidos políticos como parte de la base del sistema democrático se encuentran a mayoría de razón conferidos a respetarlos, pese a los derechos de auto determinación y auto organización, ya que los derechos no son absolutos.**

Finalmente, no pasa inadvertido para esta Sala Superior que el Morena considera **que la principal finalidad del partido es participar en los procesos electorales y resulta una carga renovarse previo al proceso electoral federal, si bien, como ya se dijo no es un argumento excepcional o extraordinario para validar la prórroga acordada**, lo cierto es que conforme a los criterios de la SCJN, el partido cuando lo estime pertinente podrá **extender o acortar los mandatos de los referidos cargos como una previsión a futuro**, a fin de coincidir con la renovación de los demás integrantes del órgano, o bien, para no coincidir con los procesos electorales federales.

Por todo lo anterior, **esta Sala Superior determina la invalidez del artículo tercero transitorio.**

(SIC)

(énfasis añadido)

Para llegar a dicha determinación, se realizó una valoración de los principios reconocidos en materia electoral y criterios adoptados por el TEPJF, teniendo en síntesis bajo la argumentación planteada, los siguientes:

- **Violación a la integridad electoral.**
- **Violación al principio de seguridad jurídica.**
- **Violación al principio de certeza.**
- **Vulneración a la integridad procesal**
- **Vulneración del principio de cosa juzgada.**
- **Violación al principio de periodicidad de las elecciones.**
- **Imposibilidad de prorrogar los cargos al no actualizarse causas extraordinarias y transitorias conforme al criterio jurisprudencial 48/2013 de rubro **DIRIGENTES DE ÓRGANOS PARTIDISTAS. OPERA UNA PRÓRROGA IMPLÍCITA EN LA DURACIÓN DEL CARGO, CUANDO NO SE HAYA PODIDO ELEGIR SUSTITUTOS. POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS Y TRANSITORIAS.****
- **Señala diversos casos conocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se ha tratado de realizar la ampliación del cargo de personas servidoras públicas, determinándose su inconstitucionalidad, a saber: Acciones de inconstitucionalidad 3/2002, 8/2002, 39/2006 y sus acumuladas, 47/2006 y sus acumuladas y 13/2015, 112/2019 (ampliación del periodo del Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla), 95/2021 (Ampliación del periodo como Ministro Presidente de la SCJN del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por dos años más y de los Consejeros del CJF)**
- **Violación al principio de no reelección.**
- **Vulneración del Estatuto del Partido político Morena y el sistema democrático.**

POSTURA NORMATIVA

En virtud de lo expuesto con base en los argumentos realizados por la Magistrada ponente, se considera que la postura para declarar como invalido el articulo tercer transitorio adoptado inconstitucionalmente para ampliar

los cargos de Presidente y Secretaria General del partido político de Morena, en efecto atentan contra los principios democráticos que la Constitución señala como limitantes para salvaguardar los derechos de toda persona como militante de dicha organización política.

Asimismo, el asunto en cuestión y la postura normativa del proyecto de resolución indica de manera amplia la argumentación para considerar como inconstitucional dicho acto impugnado, empero también, es menester que las y los jueces del Estado mexicano observen en sus resoluciones adoptar aquellos criterios internacionales tendientes a salvaguardar los derechos humanos de las personas frente al Estado, en este caso México, siendo un país que aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana y cuyas resoluciones son vinculatorias a este, siempre y cuando no se contrapongan a la Constitución Federal, considerando así la aplicación del llamado parámetro de regularidad constitucional o bloque de constitucionalidad, reconocida históricamente a través de los siguientes antecedentes: 1) expediente varios 912/2012, resuelto el 14 de julio de 2011 y formado con motivo de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Rosendo Radilla Pacheco vs México; 2) Sentencia dictada en el amparo directo 28/2010 del 23 de noviembre de 2011; 3) Acción de inconstitucionalidad 155/2007, resuelta el 7 de febrero de 2012; y 4) Contradicción de Tesis 293/2011, dictada el 3 de septiembre de 2012.

Dicho bloque y referente interpretativo se da entre la relación de los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello implica el establecimiento de un referente interpretativo conformado tanto por la Constitución como por los tratados en materia de derechos humanos ratificados por México, y por ende, el conjunto amplio de estándares internacionales desarrollados por los órganos facultados para su interpretación. Entre ellos se encuentran los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) **que sujeta a las y los jueces** a resolver los casos que se les presentan utilizando ambos ordenamientos como un único cuerpo normativo sin las jerarquías y fronteras tradicionales.

Además, en el párrafo segundo se establece la interpretación **pro personae**, principio que prevé que en caso de existir diferentes entendimientos de una misma norma jurídica o la posibilidad de aplicarse más de una norma, **el o la jueza debe elegir la más protectora para el titular del derecho humano en cuestión**, salvo las limitaciones expresas contenidas en la Constitución.

En el presente caso, como bien lo afirma el proyecto de resolución, si bien es cierto, bajo los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho de definir la forma de gobierno y organización que considere adecuada, y con ello poder extender o acotar los mandatos de los referidos cargos como una previsión a futuro, esta se encuentra frente al ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las y los militantes de un partido político, cuya protección esencial se crea sobre la base de proteger su derecho de participación activa y pasiva para poder participar, asociarse y elegir a sus dirigentes y así establecer su vida interna, por lo que bajo dicha interpretación, resulta insoslayable adoptar una postura que beneficie en la protección más amplia de estos derechos por encima de una arbitrio único y personal que pretende imponer una reelección con el argumento de “no generar ruido”, como en diversas ocasiones lo han manifestado las personas que actualmente ostentan los cargos de Presidente y Secretaría General del CEN.

Bajo ese paradigma tales derechos, consagrados en diversos instrumentos internacionales, “propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político”, así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) en sus principales pronunciamientos en materia de derechos políticos, casos como Castañeda Gutman vs México y Yatama vs Nicaragua. Así mismo, la CIDH ha señalado que los titulares no solo deben gozar de estos derechos, sino de “oportunidades”, lo cual implica “la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos”. No obstante, la imposición de un transitorio que amplía una “prorroga” sin un argumento suficiente para ello, determina *per se* un obstáculo por parte del partido político Morena para que sus militantes como titulares de estos derechos puedan acceder a “oportunidades” para elegir o bien ser elegidos y participar de forma activa en la elección de sus dirigentes políticos, ya sea de forma activa o pasiva, se cita:

“El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público. Además de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención que se reconocen a toda persona, el artículo 23 de la Convención no sólo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término “oportunidades”. **Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos.** Como ya

lo señalara este Tribunal anteriormente, es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación.”¹

Por otro lado, la CIDH destacó que los derechos políticos tal como son considerados por la Declaración asumen lo siguiente:

[...] tienen dos aspectos claramente identificables: **el derecho al ejercicio directo del poder y el derecho a elegir a quienes deben ejercerlo**. Ello supone una concepción amplia acerca de la **democracia representativa** que, como tal, descansa en la soberanía del **pueblo y en la cual las funciones a través de las cuales se ejerce el poder son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres** y auténticas.²

Es decir, la democracia representativa como aquella en la que se sostiene el sistema democrático mexicano, debe asegurar el derecho al ejercicio directo del poder y el derecho a elegir a quienes deban ejercerlo, pues se impone la obligación a los partidos políticos de ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado Democrático de Derecho, de tal manera que este límite no solo se encuentra en la Constitución Federal, sino en aquellos instrumentos convencionales, siendo el caso que, si se válida la constitucionalidad de un “transitorio” cuya “prorroga” ni siquiera fue discutida ni considerada bajo supuestos “extraordinarios o excepcionales” y mucho menos justificada, atentaría contra la base dual del ejercicio democrático que los partidos políticos deben sujetarse en México, siendo no solo un ámbito constitucional sino ahora bien convencional.

En este contexto de defensa de la democracia, en 2002, se proclamó la Carta Democrática Interamericana, con el propósito de promover y consolidar la democracia representativa y proveer los mecanismos colectivos para dicho propósito. Así, este instrumento reza en su artículo 1º que: “los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. En ese sentido, el Poder Judicial como parte fundamental de la división de poderes en un Estado Democrático, debe salvaguardar la defensa de la democracia y consolidarla, lo cual, en el caso en concreto, se estima podría apoyar al declarar inconstitucional

¹ Cfr. Caso Castañeda Gutman Vs. México.Excepciones preliminares. Sentencia de 1o de julio de 2009. Serie C No. 39, párr. 145.

² Informe Anual 2002, CIDH 2003a, Cap. IV, Cuba, párr. 11

el multicitado “tercero transitorio” bajo las razones expuestas por la magistrada ponente, no obstante, el ser el actuar de esta Sala Superior instaurado como un órgano colegiado, debe sortear las presiones externas, en este caso aquellas asumidas por dirigentes que desestiman el actuar judicial y lo pongan en riesgo, por lo que resulta indispensable que dicho proyecto sea complementado conforme a la normativa convencional y así estar en posibilidad de resolver con plena independencia, autonomía y amplitud de derecho, pues basta con observar los principios de una democracia representativa para adoptar dicha postura, al respecto la CIDH ha asumido lo siguiente:

La Corte recuerda que el objeto y fin de la Convención es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”³, a propósito de lo cual fue diseñada para proteger los derechos humanos de las personas independientemente de su nacionalidad, frente a su propio Estado o a cualquier otro. **El compromiso estatal con el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, tal como manda el artículo 1 de la Convención Americana, constituye un presupuesto esencial de la consolidación democrática y abona a un posicionamiento legítimo del Estado frente a la comunidad internacional.**

De acuerdo a la Carta Democrática Interamericana “**son elementos esenciales de la democracia representativa**, entre otros, **el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales**; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; **la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo**; **el régimen plural de partidos y organizaciones políticas**; y **la separación e independencia de los poderes públicos**” .⁴

Es en tanto, estos principios básicos de la democracia los que se rompen conforme a las violaciones expuestas por el proyecto de resolución con dicho tercero transitorio, pues no sólo el partido político trata de desestimar fallos judiciales y criterios jurisprudenciales internos, sino además pretende romper con aquellos reconocidos por el Estado mexicano, y cuya base es esencial en su observancia por todas y todos los actores políticos involucrados en ella.

³ Opinión Consultiva OC-2/82

⁴ Carta Democrática Interamericana, artículo 3.

Ahora bien, tal y como lo señalo la magistrada ponente en los diversos casos donde se pretendió realizar la ampliación de un cargo en la órbita del sistema jurídico mexicano, es importante traer a colación aquellos en los que se ha abordado una figura igual o similar en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, en específico, se trae a colación la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Colombia ante la CIDH sobre “La figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Para tal efecto, la CIDH analizo las siguientes preguntas:

- 1) ¿Es la reelección presidencial indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos?
- 2) ¿Resultan contrarias al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial?
- 3) ¿Es la limitación o prohibición de la reelección presidencial una restricción de los derechos políticos que resulta acorde a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? y 4) ¿Es la reelección presidencial indefinida compatible con la existencia de la democracia representativa en el sistema interamericano de protección de derecho humanos?

Sobre el particular, la CIDH resolvió lo siguiente:

La prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana, la Declaración Americana y la Carta Democrática Interamericana, atendiendo a que “el derecho a votar no implica el derecho a tener opciones ilimitadas de candidatos a la Presidencia. En cambio, el derecho protege que los votantes puedan elegir libremente entre los candidatos inscritos, y que las restricciones para postularse como candidato no sean contrarias a la Convención. La prohibición de la reelección presidencial indefinida limita la posibilidad de los ciudadanos de reelegir al Presidente por más de dos períodos consecutivos cuando consideren que es la persona más adecuada para el cargo. Sin embargo, este Tribunal reitera que, de acuerdo al artículo 32 de la Convención, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común. En este sentido, las exigencias del bien común requieren que se establezcan salvaguardas a la democracia, como lo es la prohibición de la reelección presidencial indefinida. Además, la Corte resalta que esta prohibición no afecta el derecho de los votantes a seleccionar, entre los candidatos, a la persona más afín a sus preferencias, incluso pudiendo ser un representante del mismo partido

político que el Presidente en ejercicio. Por tanto, el Tribunal observa que **esta limitación es menor cuando se compara con los beneficios que trae para la sociedad la prohibición de la reelección presidencial indefinida.**”

Es entonces, aceptado convencionalmente que la restricción aplicada por un Estado o en este caso por un Partido Político para acotar una “reelección” como lo es la denunciada de *facto con el tercer transitorio*, implica un límite sobre las bases y exigencias mínimas de una sociedad que, si un Estado debe adoptar en un ámbito referido al Presidente de la República, con mayor razón lo debe ser al de cargos inferiores, de elección popular o de organizaciones políticas, en específico de partidos políticos, como lo es el caso en concreto.

Asimismo, “la CIDH reiteró que la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos es la base de todo el sistema del que la Convención forma parte y consideró que los principios de la democracia representativa incluyen, además de la **periodicidad de las elecciones y el pluralismo político, las obligaciones de evitar que una persona se perpetúe en el poder, y de garantizar la alternancia en el poder y la separación de poder**”, lo cual fortalece la argumentación presentada en el proyecto de resolución y la salvaguarda de los derechos de las y los ciudadanos militantes del partido político Morena.

Por otra parte, respecto a la compatibilidad de la reelección presidencial indefinida con las normas de derechos humanos, “la Corte resaltó que la falta de limitaciones a la reelección presidencial conlleva el debilitamiento de los **partidos y movimientos políticos** que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder.” En este sentido, si dicha reelección injustificada supone un debilitamiento de partidos, lo mismo ocurre tratándose de sus **dirigencias de partidos políticos**, pues permitiría una ampliación del poder de los dirigentes, coartando el derecho de participación de las y los militantes para participar por cargos de elección popular.

A su vez, “la Corte señaló que la permanencia en el poder de un presidente por un largo período de tiempo afecta la independencia y la separación de poderes, dadas las capacidades que puede tener de nombrar a miembros de otros Poderes del Estado. Asimismo, **consideró que el cargo de la Presidencia brinda a la persona que lo ocupa una posición privilegiada para la contienda electoral**. Mientras mayor sea el tiempo de permanencia en el cargo, mayor será esta ventaja.”

AMICUS CURIAE

12.04.2023

EXPEDIENTES: SUP-JDC-1471-2022 Y ACUMULADOS.

Es decir, el tiempo como factor determinante en las democracias, supone una posición privilegiada de las cúpulas, lo cual debilita el sistema democrático de los partidos políticos y por ende el mismo Estado Democrático de Derecho, por ello, el fin prístino de la primera porción normativa del artículo 38 del Estatuto del Partido Político Morena es la de acotar la reelección injustificada, y así asegurar los derechos de las y los militantes para elegir a sus dirigentes.

En esa tesitura, conviene que las y los juzgadores puedan adoptar además de un análisis constitucional, aquel convencional, especialmente como un criterio orientador que sirva para determinar la resolución de un juicio de tal envergadura e importancia como lo es este. Por tanto, las anteriores consideraciones que se realizan por los hoy firmantes, se presentan con el fin de que esta H. Sala Superior pueda tomar en cuenta al momento de analizar y resolver este acto impugnado, con el pleno respeto a las atribuciones y competencias que les dota la Constitución Federal, sin pretender restringir en absoluto el alcance o facultades de los partidos políticos, en específico Morena.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicitamos:

PRIMERO. Tener por presentado el presente **AMICUS CURIAE DENTRO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES EN LOS EXPEDEINTES SUP-JDC-1471 Y ACUMULADOS** en los términos del mismo.

SEGUNDO. Ser tomadas en cuenta las consideraciones aquí expuestas, a fin de que se resuelva conforme a un criterio garantista y el parámetro de regularidad constitucional reconocido en el sistema jurídico mexicano.

¡POR ENCIMA DE LA LEY, NADIE!

¡AL MARGEN DE LA LEY, NADA!

Ciudad de México, a 12 de abril de 2023.